



Aviso Legal

Artículo de divulgación

Título de la obra: El revelador chiapaneco

Autor: Favre, Henri

Forma sugerida de citar: Favre, H. (1997). El revelador chiapaneco. *Cuadernos Americanos*, 4(64), 32-64.

Publicado en la revista: *Cuadernos Americanos*

Datos de la revista:

ISSN: 0185-156X

Nueva Época, año XI, núm. 64, (julio-agosto de 1997).

Los derechos patrimoniales del artículo pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este artículo en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Sin derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0 Internacional).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>



D.R. © 2021 Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, México, Ciudad de México.

Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe
Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510,
Ciudad de México. <https://cialc.unam.mx/>
Correo electrónico: betan@unam.mx

Con la licencia:



Usted es libre de:

- ✓ Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo los siguientes términos:

- ✓ Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- ✓ No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- ✓ Sin derivados: si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

EL REVELADOR CHIAPANECO

Por *Henri Favre*
CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, PARÍS

LA NOCHE del 31 de diciembre de 1993 al 1o. de enero de 1994, día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, tres o cuatro mil guerrilleros salidos de las profundidades de la Selva Lacandona se apoderan de San Cristóbal de Las Casas, la vieja metrópoli colonial de Chiapas, después de haber tomado al pasar las localidades de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. A los turistas encandilados con los que se mezcla y a los corresponsales de prensa con los que se prodiga en conferencias, su jefe anuncia que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha pasado a la ofensiva. El "Subcomandante Marcos" —tal es el nombre bajo el cual se presenta este personaje de rostro enmascarado con un pasamontañas— agrega que el EZLN no depondrá las armas sino al término de la marcha victoriosa sobre México que acaba de emprender. Un documento hecho célebre, la *Declaración de la Selva Lacandona*, al que Marcos da lectura desde el balcón de la alcaldía, fija los ideales en nombre de los cuales se emprende la lucha: la libertad, la justicia, la democracia, la independencia nacional y la paz de las que aquéllas son la garantía. Estigmatiza la "dictadura de más de setenta años" que ejerce el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la "camarilla de traidores", que ha vendido el país firmando el TLC y el "ilegítimo" Carlos Salinas de Gortari que es su cabeza. Por fin, subraya que la insurrección procede del sector más depauperado y humillado del pueblo mexicano, constituido por los indios: aunque nosotros seamos "los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad" no tenemos nada, "absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación; sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a

nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros''. Esta situación lamentable no es privativa de los indios, reconoce el documento; es compartida en diversos grados por millones de otros mexicanos, que son invitados a unirse al movimiento insurreccional del cual unos días más tarde se sabrá que toma la dirección un Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), formado por "comandantes", los cuales representan a las principales etnias de Chiapas.

De hecho, la marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre México se detendrá en San Cristóbal. Compuesto de jóvenes —de los cuales un buen tercio son mujeres—, la mayor parte adolescentes apenas salidos de la infancia, provistos de armas de fuego heterogéneas, generalmente viejas o de débil potencia, incluso de machetes o hasta simples palos, el EZLN es incapaz de tomar Rancho Nuevo, sede de la 31a. Zona Militar, situado cerca de la ciudad y cuya caída debía librar a los insurgentes el armamento que les faltaba. Tampoco logra unir a su causa a las comunidades indias que rodean la ciudad y cuya población organiza espontáneamente la defensa, como en Chanal, Huixtán y Oxchuc, donde algunos guerrilleros se habían infiltrado. Tampoco logra contener el avance de un destacamento militar rápidamente enviado de Tabasco que, desde el 2 de enero, alcanza Ocosingo, donde los combates más sangrientos se iban a desarrollar. Perseguidos por el ejército federal, los insurgentes se repliegan en buen orden hacia la Lacandona, en la región de Las Cañadas, de donde habían llegado, llevando consigo a un ex gobernador del estado, Absalón Castellanos Domínguez, que se había hecho particularmente odioso por la política represiva llevada a cabo contra las organizaciones populares durante su mandato. El 12 de enero con su reducto rodeado por el ejército, el presidente Salinas, que considera alejado todo peligro, decide la suspensión unilateral de las hostilidades y propone una ley de amnistía. Por su lado, el EZLN ordena a sus tropas cesar el fuego. El conflicto entraba en su fase política. La fase militar, que había durado exactamente once días, se saldaba con unas 150, quizás 200 víctimas, de las cuales 39 eran de las fuerzas del orden y 71 de los guerrilleros, según las cifras oficiales.

Si la insurrección neozapatista no hizo correr mucha sangre hizo por el contrario correr mucha tinta. No es cuestión de recordar todas las interpretaciones a las cuales dio lugar por parte de analistas más o menos bien informados (o desinformados), que no siempre controlan sus emociones, incluso cuando llegan a disimu-

lar sus posiciones tomadas.¹ Nos limitaremos a notar que la mayor parte de ellas entran en dos grandes categorías. Según algunos, en efecto, que prestan fe a la abundante literatura producida por *Marcos* y difundida por fax, por teléfono celular, por correo electrónico y por la red Internet, la insurrección neozapatista sería un movimiento democrático y popular, en ruptura con todas las guerrillas marxistas que América Latina ha conocido en el curso de los anteriores decenios. Representaría “la primera insurrección poscomunista del siglo XXI”, de un siglo considerado el de la autonomía social y del pluralismo político y cultural. El hecho de que indios surgidos del fondo de la Lacandona —es decir de ningún lado— intervengan, armas en mano, en el debate nacional sobre el TLC y el neoliberalismo y que, utilizando las tecnologías de la comunicación más sofisticadas, se pronuncien por una opción de sociedad que compromete el futuro a largo plazo de México, debía incluso valerle el calificativo de “posmoderna”.

Para otros, que prefieren relacionarla con el pasado más que proyectarla a futuro, la insurrección neozapatista se inscribiría en la larga tradición de levantamientos indígenas de los que Chiapas ha sido periódicamente teatro desde la época colonial. Expresaría la resistencia que los indios no han cesado de oponer desde hace quinientos años al mundo occidental que los oprime.² Su explicación se hallaría en las condiciones arcaicas que aún prevalecen en un estado pobre, que el poder central dejaría abandonado, donde la Revolución nunca habría llegado, donde la gran propiedad territorial coexistiría con un campesinado miserable, y donde los indios, despojados de sus tierras, continuarían siendo víctimas de segregación y de explotación como en los tiempos del Porfiriato. En resumen, se trataría de una reedición actualizada de las “guerras de castas” de antaño, que vendrían oportunamente a recordar a las élites nacionales, orgullosas de haber hecho entrar a su país al club cerrado de las potencias industriales, que México sigue perteneciendo al Tercer Mundo.

Estas dos interpretaciones coinciden en un punto que no merece menos examen. Reconocen tanto una como otra que la insu-

¹ La obra de Carlos Tello Díaz, *La rebelión de las Cañadas*, 2a. ed., México, Cal y Arena, 1995, constituye una excepción tanto más notable cuanto sigue siendo la única hasta hoy.

² Véase especialmente June Nash, “The reassertion of indigenous identity: Mayan response to state intervention in Chiapas”, *Latin American Research Review*, vol. 30, núm. 3 (1995), pp. 7-41.

rección neozapatista tiene una base indígena y que se inspira en una ideología de tipo libertario o "liberacionista". Pero ¿es tan "moderna" (o "posmoderna") como pretende la primera, o tan "tradicional" como sugiere la otra? Replanteando el punto sobre el cual las dos están de acuerdo, el estudio del contexto social en el cual la insurrección estalla es susceptible de manifestar su auténtica novedad, mientras que la investigación sobre sus orígenes puede revelar lo que tiene todavía de antiguo.

* * *

En Chiapas, 30% de la población es analfabeta y más de 80% no tiene acceso al sistema de salud; 19% de los activos carecen de recursos y 40% disponen de un ingreso inferior al salario mínimo; 29% de los niños están fuera de la escolarización obligatoria; 35% de las localidades no poseen electricidad; tres alojamientos sobre cinco no tienen agua corriente. Otros índices de pobreza, todos muy superiores al promedio nacional, podrían alargar esta enumeración.

Sin embargo, la imagen de una Chiapas dormida en el pasado y al margen de la vida moderna no corresponde a la realidad. Si la Revolución se quedó por mucho tiempo detenida en los límites del estado como consecuencia de un acuerdo entre el presidente Obregón y los grupos conservadores locales en 1920, por fin llegó e hizo su obra. La reforma agraria, tímidamente esbozada bajo la presidencia de Cárdenas a costa de las plantaciones de café de la Sierra Madre del Sur, fue relanzada en los años sesenta. Luego se aceleró, liquidando la gran propiedad y tocando incluso la propiedad mediana. Las tierras acaparadas privadamente se desmenuzan en beneficio de un campesinado organizado en ejidos. En el municipio de Ocosingo, por ejemplo, una parte del cual está incluida en el territorio neozapatista, las superficies detentadas por los ejidatarios, que representaban sólo 11 295 hectáreas en 1950, totalizan 1 026 756 hectáreas desde los setenta.³ Las transferencias de tierra no comprometen la producción agrícola bruta. Al mismo tiempo que se realizan, el cultivo del café en el marco de pequeñas explotaciones familiares se extiende en la región septentrional, mientras que se desarrolla la ganadería bovina.

Desde fines de los años sesenta, el gobierno federal realiza grandes inversiones en infraestructura caminera y en obras hidroeléctri-

³ Salvo indicación contraria, todas las estadísticas económicas y demográficas están extraídas de los censos nacionales.

cas en el curso medio del Grijalva. A comienzos de la década siguiente, la empresa pública PEMEX toma el relevo invirtiendo en la prospección y explotación de hidrocarburos en el norte y este del estado. En 1994 Chiapas produce 55% de la electricidad que México consume y se ha convertido en uno de los primeros estados petroleros de la Federación. Pero, por la misma fecha, cerca de 40% de los hogares chiapanecos no están conectados a la red eléctrica.

Estas inversiones masivas refuerzan la economía de Chiapas en la vocación exportadora que le dan la ganadería y la cafecultura, pero no la desarrollan y la población espera en vano la rebalsa. Si la creación de la red caminera favorece el florecimiento del turismo y de los servicios anexos, la producción de electricidad y la explotación de petróleo no dinamizan la actividad local. No tienen el efecto de apoyar al sector industrial que sigue ocupando menos de 6% de la población en edad activa y que sigue estando constituido por pequeñas empresas, la mayoría de las cuales emplea menos de cinco asalariados. Tampoco tienen éstas incidencia directa o indirecta en el empleo, cuya oferta se estanca en un momento en que la demanda de trabajo aumenta como consecuencia de la abundancia demográfica.

En efecto, Chiapas, que tenía 1.2 millones de habitantes en 1960, cuenta con una población de 3.2 millones en 1990. La tasa anual de crecimiento de la población, que era de 2.2% en aquella fecha, se eleva a 3.6% en la segunda, mientras que la tasa de crecimiento del conjunto de la población de México se desacelera y retrocede a 2.6%. Alrededor de San Cristóbal, en las tierras altas pobladas por los tzotziles y los tzeltales, las densidades alcanzan o sobrepasan los 100 habitantes por km². Bajo la presión demográfica, las viejas estructuras comunitarias crujen, las tierras sobreexplotadas se agotan, los rendimientos agrícolas bajan. En número creciente los campesinos abandonan la esfera de la economía de subsistencia que ya no alcanza a contenerlos. Algunos van a buscar un medio de supervivencia en las localidades urbanas, que comienzan a rodearse de ciudades perdidas. Otros abandonan sus comunidades o ejidos una vez que se realiza la cosecha para esparcirse por el estado en busca de actividades precarias que los ocupen durante algunas semanas o algunos meses. La descomposición del campesinado engendra una población flotante, en perpetuo desplazamiento de un lugar a otro, que ya no es del todo rural pero que no puede realmente urbanizarse, y que la desocupación más o menos encubierta pero de hecho permanente priva de identidad social y condena a vivir en una inseguridad total. El crecimiento de esta población

supernumeraria modifica profundamente la configuración de la sociedad chiapaneca, al interior de la cual las barreras que separan a los ladinos de los indios tienden a difuminarse y las relaciones sociales a adquirir una mayor fluidez.

La presión demográfica tiene otra consecuencia: multiplicar un poco por doquier los conflictos: entre ganaderos y cultivadores, entre propietarios y campesinos, entre propietarios individuales y ejidatarios, entre ejidos cuyos límites se entreveran y cuyas tierras se superponen. Los reclamantes, que apelan de buen grado a la opinión pública, acuden en marcha a las ciudades y van a instalar pancartas bajo las ventanas de las autoridades. Litigios que se arrastran desde hace lustros ante los tribunales adquieren una súbita actividad y se regulan cada vez más frecuentemente con la invasión de la parcela en litigio y la expulsión de sus ocupantes, al precio de algunos muertos o heridos. El recurso a la violencia para dar una solución suscita reacciones de autodefensa y lleva a veces a la formación de milicias. Sin embargo, como cada conflicto se organiza en general alrededor de una meta tan precisa como limitada y rara vez desborda su cuadro, la violencia se dispersa en pequeños focos autónomos que no amenazan provocar un gran incendio.

El cisma religioso introduce nuevas divisiones en esa sociedad que se desmorona y revela el carácter conflictual que reviste. Implantado en Chiapas hacia 1920 por la Iglesia presbiteriana, reforzado por el establecimiento del Instituto Lingüístico de Verano unos veinte años después, el protestantismo provoca, a partir de los años sesenta, un movimiento de conversiones de tal amplitud que en 1990 cerca de 30% de los chiapanecos se declararán al censo como 'evangelistas'. En efecto, este movimiento no beneficia a las Iglesias protestantes propiamente dichas. Favorece esencialmente a un pulular de sectas, la mayoría de origen protestante, la mayor parte de las cuales tienen su centro en los Estados Unidos. Pentecostalismo, Adventismo, Asamblea de Dios, Nueva Renovación en Cristo, Columna del Dios Vivo, Luz del Mundo, Testigos de Jehová, Iglesia Apostólica, Iglesia de Dios de la Profecía y otras adquieren fácilmente adeptos en la masa de individuos desarraigados, atomizados y en condiciones precarias. A todos los que han salido del mundo campesino tradicional para encontrarse socialmente en tránsito hacia ninguna parte, las sectas ofrecen puntos de referencia y una nueva esperanza; entre ellos, sobre todo, reestablecen un lazo social.

La Iglesia católica, que pierde su monopolio religioso, responde tardíamente a la competencia que se le hace. La respuesta llega, sin embargo, a fines de los años sesenta, en la diócesis de San Cristóbal, por los menos. Es dada por Samuel Ruiz García, obispo considerado, no sin razones, conservador. Después de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar en Medellín en 1968, Samuel Ruiz decide poner prudentemente en marcha la política de "Aculturación de la fe" que el Concilio Vaticano definió y que debe permitir a toda colectividad cultural apropiarse del mensaje evangélico. Como la colaboración del clero local no le es dada *a priori*, se apoya en misioneros extranjeros y en órdenes religiosas como los maristas, los jesuitas establecidos en Bajachón y los dominicos instalados en Ocosingo. Más que enseñar el dogma desde lo alto de la cátedra, estos sacerdotes acompañan a la población en su descubrimiento de la palabra divina. Entre los indios —a los que se apunta prioritariamente— preparan catequistas, luego diáconos, que pronto se transforman en nuevas élites religiosas, pero también sociales y políticas, al interior de sus comunidades. La metodología de la catequesis que aplican los lleva poco a poco a identificarse con sus feligreses, a compartir sus problemas cotidianos y a buscarles la solución. Este camino, en el cual muchos de ellos dejan el hábito sin abandonar necesariamente Chiapas ni salir del regazo de la Iglesia, los lleva naturalmente al encuentro de la Teología de la Liberación.

La respuesta católica al desafío protestante, y sobre todo los caminos que toma, es mal recibida por la opinión conservadora. Es abiertamente criticada por los indios apegados a la costumbre y al catolicismo tridentino, que es su parte integrante, así como por las autoridades tradicionales cuyo poder amenazan diáconos y catequistas. A partir de 1974, en Chamula primero, luego en Mitontic y Zinacantán, las tensiones entre católicos tradicionales y neocatólicos, que mal encubren conflictos de intereses, desembocan en expulsiones periódicas de disidentes religiosos entre los cuales figuran, por otra parte, muchos protestantes. En todo, cerca de treinta mil personas, que han debido abandonar tierras, ganado y casa, van a engrosar las ciudades perdidas de San Cristóbal. Al apoyo que les da el obispado, las autoridades de Chamula responden prohibiendo el acceso de la comunidad a la clerecía diocesana y afiliándose a la Iglesia integrista fundada en Tuxtla Gutiérrez por un sacerdote que no ha aceptado las reformas del último concilio.

La situación incierta que se instaura en Chiapas es propicia para todo tipo de intentos políticos. Desde mediados de los años setenta, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), cercano al presidente Echeverría, encuentra apoyo en el entorno del gobernador y utiliza la infraestructura del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) para implantarse en la región cafetalera septentrional. El Partido Comunista Mexicano (PCM), que se transforma en Partido Socialista Unificado de México (PSUM) en 1981, luego en Partido Mexicano Socialista (PMS) en 1987, antes de convertirse en uno de los componentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), realiza en otras regiones un trabajo más discreto pero más sostenido. Por el contrario, el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), de orientación nacionalista y socializante, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de estricta obediencia trotskista, obtienen éxitos modestos y puntuales. Mientras que el PST, el PCM, el PMT e incluso el PRT rechazan la vía de la violencia, otras formaciones que les hacen competencia no esperan el triunfo del socialismo más que de la lucha armada a la que se preparan clandestinamente. Estas formaciones, como las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), la Unión del Pueblo (UP), Línea Proletaria (LP) o Política Popular (PP) se refieren a menudo al ejemplo castrista, quizás por necesidad estratégica, pero la mayoría de ellas abrevan su inspiración en el maoísmo.

Estos partidos, que tratan de abrirse un espacio político a la izquierda del PRI, se esfuerzan por ensanchar su base social y territorial por medio de organizaciones de tipo sindical que ellas engendran, controlan o infiltran. Desde fines de los años setenta, el PCM establece en Chiapas la Central Independiente de los Obreros Agrícolas y de Campesinos (CIOAC). Por la misma época, la UP construye los primeros niveles de la Unión de Uniones de Ejidos y Grupos Campesinos que Política Popular, luego Línea Proletaria, animan bajo el agua hasta 1982, mientras que las FLN crean la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ), después de haber perdido su posición en la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC).

Asociaciones que se lanzan a diversas experiencias de concientización popular, de promoción cultural o de desarrollo autogestionado colaboran a menudo con los partidos en el montaje institucional de las organizaciones sindicales. Muchos de estos centros de *bricolage* social, como Slop, Chiltak, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) o el Instituto de Asistencia Antropológica para la Región Maya (INAREMAC), que están dirigidos

por sacerdotes o antiguos sacerdotes, evolucionan en la órbita del obispado de San Cristóbal. A veces suministran a los empresarios políticos una ayuda financiera, con más frecuencia les proporcionan un apoyo logístico, pero sobre todo les ofrecen una cobertura humanitaria o científica que es muy apreciada por los partidarios de la acción clandestina y que se revelará por otra parte eficaz. Entre ellos se codean curas que han colgado los hábitos y que se reciclan en la *agip-prop*, asistentes sociales reconvertidos en la manipulación de las masas y revolucionarios profesionales disfrazados de antropólogos o historiadores.

La primera característica que comparten estos partidos, organizaciones y asociaciones deriva de que su establecimiento en Chiapas rara vez es resultado de iniciativas locales que darían testimonio que la población se hace cargo de sí misma. Son fruto de la labor de agentes venidos en misión de más allá de los límites del estado, y a veces de más lejos. Los empresarios políticos proceden de México y de otras ciudades del norte y del centro de México, como Monterrey, Puebla, Chihuahua o Torreón. En cuanto a los animadores de las estructuras asociativas en las cuales pueden encontrar refugio, son la mayor parte europeos o norteamericanos.

La segunda característica que tienen en común es que se disputan con aspereza una clientela a menudo reacia, cuyos objetivos, estrategias y tácticas no corresponden siempre a lo que pequeños estados mayores aterrizados pretenden imponerles. La concentración de la toma de decisiones en la cumbre tiende a desmovilizar la base que se han creado con dificultad, o a provocar el reflujó de los militantes hacia formaciones rivales donde van a encontrar por otra parte la misma práctica del centralismo y del verticalismo. Sin embargo, algunas formaciones, maoístas en su mayoría, escuchan a la población con la intención de penetrarla mejor, y se empeñan en responder a las expectativas que manifiestan. Se arriesgan entonces a perderse en la búsqueda permanente de soluciones inmediatas con carácter paliativo y de caer, desde las posiciones revolucionarias sobre las cuales se apoyaban originariamente, en un reformismo que la lleva a veces a compromisos, incluso a componendas, con el poder establecido. La unión de una izquierda grupuscular y vibrónica que no escapa al peligro del sectarismo más que para sucumbir al de la recuperación no deja de ser proclamada como necesaria. Sin embargo, las razones de orden puramente circunstancial por las cuales se efectúa las hacen siempre efímeras. Construidas para apariencia, las fachadas unitarias, como el Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (FOSCH) estallan en pedazos cuando se

trata de pasar a la acción, como si el inmovilismo fuera la condición de su supervivencia.

Esta oposición constituye una enorme caja de resonancia, pero no logra transformar en movimiento social la agitación ya endémica de la que amplifica poderosamente el eco. No alcanza a articularse en forma duradera alrededor de un frente estable a conflictos que se siguen multiplicando y desmigajando. Si la hegemonía priísta se hunde, no sabe sacar de ello ventaja, ni puede atribuirse legítimamente el mérito. En efecto el PRI, discutido pero nunca seriamente amenazado del exterior, entra en descomposición. A partir de 1982, pierde su capacidad de conciliar los intereses concurrentes y de imponer arbitrajes. Se deja identificar con los grupos dominantes del Estado, aunque algunos de ellos comienzan a abandonarlo. Sus centrales sindicales plantean sus diferencias. La Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y sobre todo el sindicato de la Educación son despedazados por tensiones nacidas de la afirmación de tendencias "vanguardistas" o "democráticas" en su seno. Incluso la pesada máquina electoral se descalabra. En 1993, según confesión del secretario general de la federación chiapaneca del PRI, 57% de los comités municipales del partido no tienen ya actividad, a veces desde hace algunos años, y sólo 10% de sus secciones funcionan normalmente. Como consecuencia, allí donde la revuelta más o menos espontánea se apodera de las alcaldías y donde los revoltosos expulsan a los alcaldes que dejaron de gustarles, el poder local no se levanta más. A comienzos de 1994, 23 de las 112 municipalidades de Chiapas (es decir 20.5%, o sea una sobre cinco) cuyas autoridades fueron víctimas de "furores populares" en el curso de los dos años anteriores, están en estado de acefalía. El monopolio del encuadramiento social y político que detentaba tradicionalmente el partido de Estado ha desaparecido y este encuadramiento ya no se asegura sino parcial e imperfectamente.

Frente a la entropía que se generaliza, el poder toma medidas de diversa naturaleza entre las cuales pueden discernirse los jirones de tres políticas que son puestas en obra paralelamente. De estas medidas algunas revelan una política de contención étnica. Conciernen a la región indígena de las tierras altas, que es a la vez la más pobre y la más densamente poblada, y de donde proviene el mayor número de inmigrantes en búsqueda perpetua de un empleo inhala-ble. En esta región que perciben como potencialmente explosiva, las autoridades tratan de desarmar los conflictos organizando el repliegue de la presencia ladina y procediendo a la liquidación de los

intereses que los blancos y los mestizos aún poseen. En Larráinzar en 1974, en Pantelhó, Sitalá y Chilón en 1980, en Bochil y Simojovel en el cuadro de un Plan de Rehabilitación Agraria en 1984, el gobierno del estado adquiere tierras y casas de los ladinos, a los cuales hace saber que la seguridad de sus personas y de sus bienes no puede ya ser garantizada, y los redistribuye entre los indios que los reivindicaban. La realización de la reforma agraria por medios tan expeditivos y de una legalidad tan dudosa vacía la región de sus últimos elementos no indios para convertirla en una suerte de reserva indígena en los límites de la cual la ley nacional de hecho cesa de aplicarse. Las viejas prácticas del indigenismo integrador y asimilacionista son abandonadas. Una estación de radio pública, que emite en las principales lenguas vernáculas, se utiliza para revalorizar la cultura tzotzil y tzeltal. Los educadores indios, cuyo número crece mucho, extienden la red de educación bilingüe y bicultural. Por fin, "hombres fuertes" ligados al PRI y firmemente sostenidos por todos los gobiernos sucesivos, se erigen en definidores de la costumbre, que manipulan para hacer reinar el orden al interior de las comunidades, al mismo tiempo que favorecen sus propios intereses económicos. Esta política de gestión de la indianidad, que quiere fijar, según parece, a la población indígena sobre las tierras altas congelándolas en la tradición, tiene sin embargo efectos perversos: los nuevos "jefes tradicionales" expulsan fuera de la reserva a quienes, rechazando por millares la sujeción a las viejas normas culturales, no se dejan tradicionalizar.⁴

Otras medidas se inscriben en una franca política de represión. Se endurecen desde comienzos de los años ochenta, cuando los refugiados guatemaltecos expulsados por la guerra civil comienzan a afluir y se empieza a temer una extensión de las hostilidades centroamericanas a Chiapas. La policía local aumenta el número de sus efectivos, mientras que el ejército federal refuerza su dispositivo de hombres y material, sobre todo alrededor de las tierras altas y en las regiones fronterizas, que son sometidas a una estrecha vigilancia. En un estado que se militariza cada vez más, la expresión de toda reivindicación se hace sospechosa y la agitación se combate con una violencia mal controlada. La reforma del código penal por la legislatura chiapaneca en 1990, que redefine en un sentido mucho

⁴ Hemos estudiado la puesta en marcha de esta política en "Les hautes terres de Chiapas: de l'intégration au développement séparé", *Études Rurales*, núms. 81-82 (1981), pp. 127-156.

más extensivo el delito de atentado al orden público y agrava fuertemente las penas de quienes se hacen culpables del mismo, tiende a legalizar prácticas a las cuales ligó su nombre el viejo general Castellanos Domínguez, gobernador de Chiapas de 1982 a 1988. A juzgar por la amplitud que conserva la agitación, estas prácticas se revelan poco eficaces. Es cierto que si la represión se vuelca pesadamente sobre los militantes, parece que curiosamente respeta a los dirigentes, en especial aquellos cuya labor política se realiza bajo la sombra protectora de la jerarquía católica.

Otras medidas, por fin, que se considera promueven el desarrollo económico y social pero que no estimulan la actividad productiva, en realidad trasuntan una simple política de asistencia. Las sumas que ponen en juego no son menos considerables. Aunque el cálculo exacto no ha sido hecho, se cuenta en miles de millones de dólares el dinero esparcido por el Estado con una prodigalidad inconsecuente, al principio por el Programa para el Desarrollo Económico y Social de Chiapas (PRODESCH) de 1971 a 1976, luego a través del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y de Grupos Marginados (COPLAMAR) entre 1977 y 1988, luego en el cuadro del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y del PROCAMPO a partir de 1989. Sólo en el curso de los años 1992 y 1993, PRONASOL y PROCAMPO distribuyeron 280 millones de dólares para el mejoramiento de las condiciones de vida, la creación de pequeñas infraestructuras y el sostenimiento de la producción campesina en el estado. Lejos de haber sido abandonada a su suerte, Chiapas fue objeto de la más gigantesca operación de caridad pública que haya sido jamás montada.⁵ Que esta operación desarrollada con extraordinaria perseverancia durante un cuarto de siglo haya fracasado, lamentablemente, es hoy patente. Sin embargo, el maná no habrá caído del cielo en vano, el EZLN alcanzó a captar una parte —parte ínfima ciertamente, pero sin embargo suficiente como para financiar la insurrección.

* * *

La Lacandona ocupa el este de Chiapas. Corresponde al área de desagüe del Usumacinta y de sus afluentes, el principal de los cuales, el Lacantún, nace de la confluencia del Jataté y del Santo

⁵ Thierry Linck, "Chiapas 1994: la face dévoilée de la modernité", *L'Ordinaire. Mexique, Amérique Centrale*, núm. 149 (1994), pp. 32-36.

Domingo. Al sur y al este está delimitada por la frontera mexicano-guatemalteca que la separa artificialmente del Petén. Sus límites occidentales son más fluidos, de manera que la superficie que le es atribuida varía de sencillo a doble según los criterios considerados. Para las autoridades administrativas, la unidad regional que constituye, y que comprende una parte de los municipios de Palenque, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, se extiende por unos 18 500 km², es decir 25% del territorio chiapaneco.⁶ Sin embargo, la mayoría de los geógrafos no le reconocen más que una extensión de 9 000 km², lo que representa 12% de la superficie del estado.

Se trata de una región de tierras bajas, con relieve accidentado, excepto su parte más oriental, formada por la depresión del Usumacinta y por las llanuras de Marqués de Comillas. Hasta una fecha reciente, estaba enteramente cubierta por una espesa selva pluvial cuyo carácter tropical se atenúa con la elevación. Más allá del umbral de los 500 metros de altura, en efecto, en la parte central excavada por arroyos y llamada como consecuencia Las Cañadas, el manto terrestre se transforma bajo el predominio de los pinos y las encinas. Al oeste y al norte se aclara poco a poco para ceder el lugar al monte y a la sabana arbolada.

Esta región particularmente inhóspita siempre ha sido el refugio de los insumisos. Inmediatamente después de la conquista española, mayas y choles opusieron al invasor una última pero larga resistencia que hizo de la Lacandona una 'tierra de guerra' hasta comienzos del siglo XVIII. La ciudadela que construyeron sobre el lago de Miramar no caerá sino en 1695. Los pocos centenares de lacandones que hoy se dispersan sobre frágiles establecimientos desde Tenosique hasta Bonampak son sus sucesores lejanos pero directos. En el curso de los siglos siguientes, rebeldes ansiosos de libertad, insurgentes en fuga, fugitivos de la opresión o de la justicia, encuentran asilo en el inmenso territorio de esta pequeña población que prefiere adaptarse a los rigores del medio, pagando esta adaptación al fuerte precio de un retroceso cultural, antes que sufrir el yugo del vencedor. Pero hacia 1880 el territorio de guerra convertido en 'desierto de la soledad' comienza a resonar con ruido de hachas. Compañías forestales extranjeras, a las que el gobierno federal otorga vastas concesiones, se ponen a explotar las especies preciosas, como la caoba y el cedro. A los leñadores se agregan más

⁶ Véase, por ejemplo, *Diagnóstico socio-económico de la selva lacandona*, Tuxtla Gutiérrez, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 1992, p. 81.

tarde los recolectores de látex, que suministran a la firma norteamericana Wrigley la materia prima de la goma de mascar.⁷

En los años cincuenta, los propietarios terratenientes de Ocosingo, como respuesta a los estímulos del mercado nacional e internacional, reducen las superficies cultivadas para consagrar sus explotaciones a la ganadería bovina. Los campesinos establecidos sobre los dominios son reemplazados progresivamente por vaqueros asalariados. Estos ocupantes precarios, que pagaban en trabajo la locación de su parcela, se infiltran en Las Cañadas y van a establecerse al interior de los claros que abren en la selva. Una década más tarde son alcanzados por una multitud creciente de tzeltales, pero también de tzotziles y de tojolabales, así como de ladinos pobres. Alimentada sin cesar por elementos venidos de las tierras altas indígenas, de otras regiones de Chiapas e incluso de los otros estados del centro y del norte de México, la corriente migratoria se amplía y se expande más allá de Las Cañadas, hasta la frontera guatemalteca, invadiendo de paso la última concesión forestal todavía en explotación. La Lacandona se convierte en un lugar donde las víctimas del proceso de descomposición social van finalmente a chocar, a veces en términos de una vagancia de cinco, diez o quince años. De 10 000 habitantes en 1960, la población del antiguo desierto de la Soledad pasa a 40 000 en 1970, luego a 100 000 en 1980 y a más de 150 000 en 1990, de los cuales más de la mitad vive en la zona de Las Cañadas. Entre tanto la selva, en la cual los migrantes ven a su principal enemigo, sucumbe a las quemazones. En 1994 no quedan más que 400 000 hectáreas. El incendio redujo a cenizas 60% del manto silvestre.

Es de un medio natural a la vez muy exigente y singularmente frágil que los migrantes toman posesión. En tal medio, la agricultura es gran consumidora de espacio. Los suelos frágiles, que las tormentas tropicales someten a una erosión intensa desde que el follaje de los árboles ya no los protege, se agotan rápidamente. Hay que dejarlos en reposo por largos años para que puedan recuperar una parte de su capacidad productiva y extender constantemente la superficie para estabilizar la producción. Los rendimientos, ya débiles en Chiapas, son muy inferiores al promedio del estado:

⁷ La historia de la Lacandona ha sido magistralmente estudiada en dos obras de Jan de Vries, *La paz de Dios y del Rey. La conquista de la Selva Lacandona (1525-1821)*, México, FCE, 1993, y *La conquista de la Selva Lacandona por los madereros tabasqueños (1822-1949)*, México, FCE, 1988.

1 tonelada por hectárea, contra 1.7 para el maíz, 0.4 toneladas contra 1.3 para el café.⁸ En cuanto a la hectárea de barbecho convertida en prado y destinada a la ganadería, ni siquiera mantiene a un bovino.

Sin embargo, esta toma de posesión está desprovista de fundamento legal. Las familias esparcidas deben reagruparse localmente para hacer valer sus derechos sobre las tierras que han desbrozado. Siempre largas y costosas, las iniciativas colectivas que emprenden para obtener el *status* de ejido refuerzan sus lazos, hacen nacer solidaridades nuevas y son a menudo el origen de formas inéditas de sociabilidad. Sin embargo, las reacciones tardías del poder público, a espaldas del cual se realiza la colonización, contribuyen a mantener a los colonos en la incertidumbre y la precariedad. La primera interviene en 1972, cuando el presidente Echeverría firma el decreto que establece la Comunidad lacandona y por el cual más de 600 000 hectáreas son reconocidas como "tierra comunal perteneciente desde tiempos inmemoriales a la tribu de los lacandones", que se compone en total de 66 familias extendidas. Dos años más tarde, otro decreto presidencial funda la Compañía Forestal Lacandona (COFOLASA) a la cual la comunidad confía la explotación de sus recursos.

Alimentado por COFOLASA y regido por la sociedad financiera pública NAFINSA, de la cual COFOLASA es una dependencia, la cuenta bancaria de los lacandones prospera sin que ellos nada sepan, mientras que la población de treinta establecimientos, que se encuentran en los límites arbitrariamente trazados de la comunidad lacandona, es intimada a desalojar. Una veintena de establecimientos se dejan desplazar y reconcentrar en dos aglomeraciones nuevas que reciben el nombre del presidente de México y del gobernador de Chiapas en ejercicio: Frontera Echeverría y Doctor Velasco Suárez, convertidas luego en Corozal y Palestina. Pero otras diez, que resisten a todas las presiones, se mantienen en los lugares que ocupan.

En 1978, una nueva reacción de México provoca un nuevo traumatismo en la Lacandona. El gobierno federal crea ese año la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules. La reserva recorta la comunidad lacandona, a la cual amputa 70% de su territorio. Al norte y al oeste, se extiende sobre tierras donde viven más de 5 000

⁸ Véase Gabriel Ascensio Franco, "Milpa y ganadería en Ocosingo", en Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz, eds., *Chiapas. Los nimbos de otra historia*, México, CIESAS-UNAM-CEMCA-UDG, 1995, pp. 363-373.

colonos que son, por eso, amenazados de expulsión. Los habitantes de Doctor Velasco Suárez, que la Reserva incluye en sus límites, se enteran que una vez más ocupan terrenos prohibidos. En realidad, ni la institución de la comunidad lacandona ni la creación de la Reserva Integral de la Biosfera detendrán el avance irresistible de la colonización. Pero una y otra tendrán como efecto retrasar o paralizar el proceso ya complejo de legalización de la ocupación de los suelos y nutrir el descontento de una población a la cual parece negarse el punto de aterrizaje que vino a encontrar en un lugar perdido.

Hay pues que buscar más allá de estructuras sociales esclavizantes o de relaciones de producción opresivas las causas de la insurrección neozapatista. La Lacandona no prolonga socialmente las tierras altas en cuya continuidad geográfica se sitúa. En ninguna parte se observa el antagonismo tradicional entre propietarios terratenientes y campesinos, ni la vieja oposición entre ladinos e indios, marcadas por el prejuicio y la discriminación étnicas. En esta región de colonización espontánea, la población comparte las mismas condiciones de vida. No se diferencia en clases o categorías, de las cuales una explotaría a las otras. El estado traba con su torpeza los esfuerzos que lleva a cabo para constituirse en sociedad, pero lejos de quejarse del peso de su presencia, es la lentitud con la cual despliega sus redes y sus aparatos la que se le reprocha. Como no es una lucha de clases, la insurrección neozapatista tampoco es identificable con una revuelta antiestatal.

¿Se trata de un movimiento indio? La zona de Las Cañadas que abarca tiene una población menos heterogénea que el resto de la región. A diferencia de los colonos de Marqués de Comillas que proceden de los horizontes étnicos y geográficos más diversos, los de Las Cañadas provienen en su mayoría de las tierras altas chiapanecas y son la mayoría de origen tzeltal, tzotzil o tojolabal. Pero ni el lugar de proveniencia ni el origen étnico son suficientes para definirlos. Si se midiera su volumen craneano y si se analizara el contenido de su sangre, su indianidad no dejaría ninguna duda. Por el contrario, si se considera que huyendo de los constreñimientos del medio tradicional han optado por la modernidad, la duda es permitida. Su fuga hacia ese objetivo, que se desvanece sin cesar y no puede ser alcanzado, los extrae de su condición india, de la que por otra parte pierden las marcas culturales.⁹ Los antropólogos más

⁹ A los sostenedores de una concepción esencialista del Indio, seguimos opo-

atentos a las continuidades y a las permanencias han debido reconocer que los colonos no reconstituían en Las Cañadas la comunidad tradicional con su sistema de secciones antagónicas y complementarias, su jerarquía de cargos civiles y religiosos, su ciclo de fiestas y su consejo de principales, sino que sus establecimientos pioneros, una vez estabilizados por la dotación legal de una base territorial, se organizaban y funcionaban como cualquier ejido mestizo del México rural.¹⁰ Incluso la antigua visión del mundo se transforma por la obra misionera de los dominicos que, aunque valorando los vestigios de la cultura indígena, en gran parte espectral, se dedican a destruir las creencias en la magia y el nahualismo¹¹ que son su corazón. En resumen, la base social del neozapatismo es comparable a la que tiene Sendero Luminoso en Perú, en cuanto está formada mayoritariamente por individuos de origen indio, pero que ya no son indios, que no entran en ninguna otra condición y que la sociedad nacional, incapaz de darles una utilidad y de satisfacer sus aspiraciones, relega a sus más lejanos márgenes. Cualquiera que sea la imagen que sus dirigentes pretenden imponerle, la insurrección neozapatista, como la insurrección senderista, es antes que nada un levantamiento de excluidos.¹²

Pero esta insurrección no puede explicarse sin tener en cuenta la actividad de la Iglesia católica y más particularmente de los dominicos norteamericanos de la provincia del Santo Nombre de

miendo nuestra concepción relacional, que ve en la indianidad una condición social a la que está ligado un estatuto cultural; véase Henri Favre, *Changement et continuité chez les Mayas du Mexique. Contribution à l'étude de la situation coloniale en Amérique latine*, París, Anthropos, 1971. Señalemos que la indianidad de la población migrante de la Lacandona ha sido tardíamente reconocida por la antropología. En ocasión de un coloquio científico celebrado en San Cristóbal en 1974, un antropólogo pidió con vehemencia —y sin suscitar más protesta que la nuestra— la expulsión, si era necesario por la fuerza, de “esa gente” que se apropiaba de los recursos de los lacandonos, que eran tanto más dignos de atención en cuanto eran “primitivos” y por lo tanto “puros”.

¹⁰ Véase especialmente a Xóchitl Leyva Solano, “Catequistas, misioneros y tradiciones en las Cañadas”, en Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz, eds., *op. cit.*, pp. 375-405.

¹¹ Creencia en la existencia de un doble animal que cada persona posee a lo largo de su vida, en torno a la cual se organiza un sistema de control social.

¹² Véase nuestro análisis de Sendero Luminoso en “Sentier Lumineux et horizons obscurs”, *Problèmes d'Amérique Latine*, núm. 72 (1984), pp. 5-31 [Traducción al español “Sendero luminoso y horizontes oscuros”, *Cuadernos Americanos*, núm. 4 (1987), pp. 29-58. N.d.E.] y “Sentier Lumineux et la spirale péruvienne de la violence”, *Études*, núm. 3751-2 (1991), pp. 3-15.

California, que toman a su cargo la parroquia de Ocosingo en 1963. Estos curas, que pronto se rodean de órdenes femeninas como las Religiosas de la Presentación, las Hermanas del Rosario y las Hijas de la Caridad, descubren tardíamente la presencia de feligreses en la Lacandona. Es sólo en 1971 que emprenden, al interior de Las Cañadas, una obra misionera sostenida. En su abandono, los migrantes que pueblan la zona les recuerdan a los hebreos fugitivos de Egipto hacia la Tierra Prometida, de manera que el libro del Éxodo se convierte naturalmente en la base de su pastoral, como atestigua el catecismo que establecen y que titulan *Estamos en búsqueda de la libertad*. Su colaboración con los maristas de Comitán, que tienen un centro de formación en San Cristóbal, les permite preparar jóvenes para las tareas de catequistas, luego para las de diáconos. Una vía de ascenso social, que seguirá siendo única, se abre de esta manera. Llevará a quienes la emprendan, numerosos, hacia los más variados destinos. Si catequistas y diáconos constituyen la esencia del encuadramiento neozapatista, algunos de ellos utilizarán el prestigio de sus funciones para crearse pequeños feudos y convertirse en caciques locales. Uno de ellos incluso se hará elegir diputado bajo los colores del PRI en 1994.

Constatando por otra parte el déficit societal que sufre la población de Las Cañadas, los dominicos intentan reabsorberlos, aunque se consideran mal preparados para la tarea. Sin embargo, se les ofrecen espontáneamente colaboraciones en ocasión del congreso indígena que el obispado organiza bajo los auspicios del gobierno de Chiapas en 1974, para celebrar el 500o. aniversario del nacimiento de Bartolomé de Las Casas. El congreso es un lugar de encuentro donde los responsables de establecimientos en espera de una dotación de tierra en la Lacandona establecen sus primeros contactos. Es también el lugar donde sus tutores eclesiásticos entran por primera vez en relación con los militantes de la Unión del Pueblo que el evento ha traído de México. Estos militantes pertenecen al ala maoísta de la formación clandestina, una de cuyas plazas fuertes es la universidad agrícola de Chapingo. A diferencia de sus camaradas guevaristas, con los cuales cohabitan dificultosamente, rechazan la teoría voluntarista del "foco insurreccional" y piensan que los insurgentes necesitan bases de apoyo popular para poder evolucionar como peces en el agua. A fin de crear esas bases, conviene fundirse en el pueblo, captar poco a poco su confianza y llevarlo finalmente a la conciencia de la necesidad de la insurrección. Esta manera de proceder para comunicar el mensaje es cercana a la que la Iglesia conciliar preconizaba y que los dominicos habían adoptado. Por

cierto, el mensaje era diferente, pero ello parecía secundario a estos últimos.

La colaboración que se establece, bajo la égida del obispo Ruiz, entre los dominicos y la Unión del Pueblo, da rápidamente frutos. En 1975, nace Quiptic ta Lecubtesel ("Unidos por nuestra fuerza" en tzeltal) que asocia a dieciocho grupos de colonos de Las Cañadas. La organización exige estatutariamente de sus miembros una profesión de fe católica. Sus dirigentes son todos, por otra parte, catequistas. Pero son maoístas quienes la han montado y la controlan. Quiptic, que promueve las demandas de titularización territorial, exige la creación de almacenes y la apertura de rutas, acoge rápidamente a otros seguidores del maoísmo. En 1976, en efecto, Samuel Ruiz encuentra en Torreón a militantes de Política Popular que trabajan desde hace varios años en esta diócesis en colaboración con el clero. Impresionado por los resultados que se obtienen, Ruiz los invita a extender sus actividades a Chiapas. Política Popular no sobrevivirá por mucho tiempo a sus tensiones internas, pero una de las facciones nacida de su estallido, Línea Proletaria, seguirá operando en la diócesis de San Cristóbal. Contribuirá especialmente a la fundación, en 1980, de una federación que reúne alrededor de Quiptic a otras dos organizaciones de colonos de la Lacandona: la Unión de Uniones de Ejidos y de Grupos Campesinos.

De este modo el clero católico en alianza con los maoístas se dedica a organizar socialmente un espacio donde el Estado y su partido no están presentes. Los éxitos que obtienen son a veces matizados. En 1982 por ejemplo, la Unión de Uniones entra en crisis. ¿Debe dar prioridad al establecimiento de una cooperativa de crédito o debe seguir consagrándose a la lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales? Establecer una cooperativa de crédito ¿no es entrar en el juego del capitalismo y ceder a una tendencia individualista que lleva derecho a la apropiación privada de la tierra? Finalmente, en 1983, la cooperativa de crédito es creada y la Unión de Uniones disuelta. Línea Proletaria, que está dividida, refluye en la Lacandona y abandona Chiapas. El mismo año arriban las Fuerzas de Liberación Nacional.

Como la Unión del Pueblo y Política Popular, a las que relevan, las FLN nacieron de la brutal represión del movimiento popular en 1968. Fueron fundadas en Monterrey en 1969, por estudiantes de la Universidad de Nuevo León y por antiguos militantes del Ejército Insurgente Mexicano (EIM). Desde comienzos de los años setenta, están presentes en la mayoría de las grandes ciudades de México.

En 1972, algunos militantes se trasladan a Chiapas, donde comienzan a trabajar en las tierras altas, en Larráinzar en particular, y donde establecen un campo de entrenamiento de la guerrilla en la Lacandona. Pero dos años más tarde, la captura de los archivos de la formación por la policía de Monterrey los obliga a abandonar precipitadamente el estado.

Su segundo intento de implantación será el acertado. Desde 1983, las viejas relaciones son reanudadas y las antiguas redes reactivadas. En la Lacandona, los frutos del trabajo de los primeros maoístas no necesitan más que madurar y la infraestructura regida por los dominicos se ofrece para llevarlos a su maduración, con la bendición del obispo Ruiz, que ya está dada. De la cooperación internacional, especialmente de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, se derivan fondos que, después de haber transitado por asociaciones diocesanas complacientes, financian pequeños proyectos de salud, de educación o de desarrollo rural bajo el manto de los cuales se efectúa la actividad de propaganda y de reclutamiento. A estos fondos se agregan los créditos que la población ya ganada a la causa obtiene de la banca rural, luego de PRONASOL, y que va a depositar en las cajas de las FLN como contribución a la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A diferencia de ciertas formaciones rivales, las FLN no tendrán necesidad de darse a actividades criminales ni de involucrarse en el narcotráfico para movilizar los recursos necesarios a la obtención de sus objetivos.

En 1988, la Unión de Uniones de Ejidos y Grupos Campesinos renace de sus cenizas bajo el nombre de Asociación Rural de Interés Colectivo y, accediendo rápidamente a diferentes fuentes de crédito, atrae a numerosos adherentes. Como las FLN no llegan a conservar al ARIC bajo su influencia, fundan, en 1991, la Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata, a la cual se afilian los colonos ganados al proyecto insurreccional. La fundación de la ANCIEZ ahonda la división que produjo, en el seno de la población de Las Cañadas, la toma de conciencia por Samuel Ruiz de que los simpáticos jóvenes que él creía utilizar para la mayor gloria de Dios en realidad se servían de él. En 1989, en efecto, el buen pastor que había introducido al lobo en el corral cuenta las ovejas que le quedan y constata la amplitud de los daños que el rebaño ha sufrido. Con sorprendente agilidad intelectual, cantidad de catequistas y diáconos han abrazado el nuevo credo. Ahora predicán a los fieles, cuyo cuidado espiritual tenían, otra buena nueva que promete la redención inmediata y terrestre. Cayendo —pero un poco

tarde— en cuenta de su ingenuidad, el obispo ordena al clero romper con las FLN. La orden será en conjunto seguida, pero algunos curas aislados y sobre todo las Hijas de la Caridad, que tienen el hospital de Altamirano, proseguirán sin embargo su colaboración con las FLN hasta la víspera de la insurrección.

La contraofensiva de la Iglesia contribuye a precipitar los acontecimientos. En enero de 1993, las FLN se constituyen en partido político, el Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional (PFLN). Rafael Guillén Vicente, hijo de un pequeño empresario de Tamaulipas, es su secretario para asuntos militares. Bajo el pseudónimo de *Marcos* ya dirige el frente sudeste del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que comprende, además de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, y del cual la Lacandona forma el bastión. Aunque el frente norte y el frente central no hayan llegado al mismo nivel de organización, el PFLN decide pasar a la lucha armada, bajo la presión de Guillén, quien teme de todo retraso la erosión de su base chiapaneca, que ahora le disputa el clero. El descubrimiento, por el ejército federal, en mayo, del campo que el EZLN había establecido en Las Calabazas, luego en Las Cañadas hace más urgente aún el desencadenamiento de una insurrección cuyos preparativos son ya conocidos y que todos esperan. En diciembre, cuando la cosecha se ha terminado, las familias que resisten al reclutamiento para conformarse a las consignas de la Iglesia son expulsadas de Las Cañadas. La insurrección comenzaba condenando a un nuevo éxodo, del cual nadie iba, por otra parte, a preocuparse, entre 25 y 30 000 personas, según la Cruz Roja Internacional, es decir más de una tercera parte de la población de la zona.

Que la insurrección neozapatista esté inspirada por un marxismo de los más ortodoxos, nadie pudo nunca honestamente ignorarlo. Los documentos internos del movimiento no dejan ninguna duda sobre este punto. Según la *Declaración de principios* del PFLN,

los objetivos del Partido son organizar, dirigir y encabezar la lucha revolucionaria del pueblo trabajador para arrancarle el poder a la burguesía, liberar a nuestra patria del dominio extranjero e instaurar la dictadura del proletariado, entendida como un gobierno de trabajadores que impida la contrarrevolución y comience la construcción del socialismo en México.¹³

El *Reglamento insurgente* del EZLN también es claro. El EZLN

¹³ Partido Fuerzas de Liberación Nacional, *Declaración de principios*, México, 1993.

ha sido creado, precisa, "para conquistar, por medio de la lucha armada, la liberación nacional y nuestra segunda independencia, y no suspenderá la lucha hasta instaurar en nuestra patria un régimen político, económico y social de tipo socialista".¹⁴ Pero no por esto depondrá entonces las armas "puesto que entonces se transformará en núcleo de las fuerzas armadas de la patria socialista".¹⁵ Es sobre este programa que las FLN han movilizado Las Cañadas. Contrariamente a una opinión con frecuencia expresada, su base no fue engañada sobre la naturaleza y sentido del compromiso que se le pedía. Periodistas un poco más curiosos que otros, que han conseguido sustraerse a la vigilancia de su guía, han recogido sobre el terreno, de boca de militantes muy jóvenes, expresiones sin ambigüedad sobre la lucha de clases y sobre la guerra de liberación nacional que, combinadas, aromatizan el maoísmo de buena ley.¹⁶ Más que afirmar una identidad étnica,¹⁷ los ex indios ganados por el neozapatismo parecen redefinirse como proletarios, y proletarios mexicanos, en revuelta contra la burguesía y el imperialismo. Varias prácticas del movimiento evocan por otra parte a Sendero Luminoso: el adoctrinamiento y el reclutamiento bajo las armas de niños desde la edad de diez años; el establecimiento de jerarquías paralelas de las que una, de fachada —como el comité Clandestino Revolucionario Indígena— encubre a la otra, que en realidad detenta el poder; la reorganización social de la población bajo control a fin de intensificar su fuerza bruta de trabajo, como atestigüa la construcción en algunas semanas de una aglomeración que debía acoger, en condiciones de confort rústico pero bastante tolerables, a los seis mil invitados de la Convención Democrática Nacional en plena Selva Lacandona, en el curso del verano de 1994.

El discurso indianizante que sostiene el neozapatismo parece reservado a la comunicación externa del movimiento. Este discurso evoluciona, por otra parte. Al comienzo, se sitúa en la línea del indigenismo clásico y ya superado. Se refiere a "etnias" o a "grupos étnicos" que constituyen el fundamento de la nación mexicana y cuyas demandas revisten un carácter fuertemente integracionista. Es más tarde que comienza a deslizarse hacia el indianismo. Los

¹⁴ Ejército Zapatista de Liberación Nacional, *Reglamento insurgente*, Selva Lacandona, 1993.

¹⁵ Partido Fuerzas de Liberación Nacional, *op. cit.*

¹⁶ Véase especialmente *Libération*, 21 de enero de 1994.

¹⁷ Como pretende June Nash, *op. cit.*

“grupos étnicos” se convierten entonces en “pueblos” e incluso en “nacionalidades” que reivindican ya no la integración a la nación, sino la autonomía cultural, económica y política, a fin de defender su identidad amenazada. Reivindicaciones como éstas serán llevadas a la mesa de negociaciones alrededor de la cual delegados del gobierno federal y representantes de los insurrectos se sientan en Larráinzar en 1995. Dándose cuenta que el Muro de Berlín ha caído, que la Unión Soviética ya no existe, que los sandinistas han perdido el poder en Managua, que el FMLN ha firmado acuerdos de paz con el gobierno de El Salvador, los neozapatistas ¿habrían renunciado al socialismo para hacerse paladines de la indianidad? En contacto con la “sabiduría milenaria de los indios”,¹⁸ ¿habrían modificado sus objetivos de guerra? Es mucho más probable que, mirando a lo lejos, hayan visto las posibilidades que podrían ofrecer territorios indígenas autónomos, fácilmente penetrables y fácilmente transformables en “zonas liberadas”, en persecución de su objetivo inicial.

* * *

La insurrección neozapatista corresponde pues a la acción de un frente de guerra de liberación nacional prolongada¹⁹ que un partido revolucionario clandestino ha decidido llevar a cabo y animar en el conjunto de México. La desactivación inmediata del frente norte por la policía y la desorganización interna del frente central, que no logra ni siquiera hacer caer los postes eléctricos que habían sido saboteados, la reducen pronto a las dimensiones de un levantamiento local.

Ahora bien, este levantamiento aislado en la región más marginal de un estado periférico de la Federación tiene una enorme repercusión nacional e internacional. Acudiendo por centenares a San Cristóbal de los cuatro rincones del globo, los periodistas de la prensa escrita, hablada y televisiva, con fotógrafos, camarógrafos y equipos de sonido lo convierten en un acontecimiento mundial. En

¹⁸ En torno a la influencia que la “sabiduría milenaria de los indios” habría ejercido sobre Guillén, véase especialmente René Rodríguez, “Portrait de Rafael Guillén”, *Esprit*, núm. 222 (1996), pp. 129-146.

¹⁹ En enero de 1994 algunas personas expulsadas de Las Cañadas confiaban en el curso de un “debriefing” que los neozapatistas esperaban que la guerra de liberación nacional durara unos quince o veinte años. Desertores del EZLN debían más tarde confirmarlo.

México, las asociaciones barriales, los sindicatos autónomos y las organizaciones populares, que no han tenido ocasión de expresarse sobre el viraje neoliberal del régimen y que temen las consecuencias nefastas del TLC, toman partido por los insurgentes. Las clases medias urbanas, a las que había seducido el milagro económico de los primeros tres años del mandato presidencial y que habían colaborado en la reposición de una confortable mayoría priísta en el congreso en 1991, manifiestan abiertamente simpatía por un movimiento que pretende combatir al PRI para ampliar los espacios democráticos. La *intelligentsia* hace saber enfáticamente la esperanza que pone en esta sacudida popular sobre la cual proyecta sus nostalgias nacionalistas, sus preocupaciones sociales y sus aspiraciones a una mayor liberalización de la vida pública. De este modo, Guillén se convierte en algunos días en un símbolo político al que las damas de la buena sociedad, que desfallecen bajo su mirada aterciopelada, van a dar una fuerte connotación sexual, en la mejor tradición del caciquismo latinoamericano.

En el extranjero, comités de apoyo a Chiapas en lucha se constituyen en París y en Barcelona, así como en varias ciudades de los Estados Unidos y de Canadá. Cartas de información sobre la evolución de la situación chiapaneca parten de los *campus* norteamericanos para denunciar —quizás con razón pero sin muchas pruebas— la represión de la cual los indios son, una vez más, las víctimas. Los profesionistas de los derechos humanos adoptan iniciativas y hacen firmar peticiones que apremian al gobierno mexicano para que renuncie a los negros designios que le son atribuidos. El neozapatismo ofrece por fin a una izquierda que no alcanza a reponerse del hundimiento del socialismo real un motivo de removilización y una causa que defender. La imagen internacional de México sufre, y el servicio diplomático mexicano, que no está a la altura de las ambiciones gubernamentales, ni siquiera al nivel de la importancia del país, se revela incapaz de detener su degradación.

Más que una adhesión, es una pasión lo que el neozapatismo suscita por doquier. En mucho se debe al arte que Guillén despliega en el dominio de la comunicación y de la publicidad. Con habilidad, el jefe insurrecto pone en escena la imagen del indio víctima, manipula la figura de héroes nacionales como Zapata y juega con símbolos patrióticos y religiosos entremezclados. Recurre al lenguaje evangélico así como a un *pastiche* de elocuencia indígena, con sus repeticiones, sus metáforas y sus metonimias. Sus textos pasan sin transición de la declaración grandilocuente a la confidencia zalamera y su estilo, ya trivial, ya sentimental, combina la sátira mordaz

y el realismo crudo. El fin buscado no es convencer por una argumentación lógica, sino provocar la emoción. Gracias a su retórica y a su talento teatral, gracias también al partido que sabe sacar de los medios de comunicación más modernos, Guillén ganó pronto la batalla de la opinión.²⁰

El gobierno estuvo menos sorprendido por la insurrección que por su inmenso eco. Desde 1991, los servicios de inteligencia le habían informado que un grupo clandestino, entonces perfectamente identificado, se preparaba a la lucha armada en la Lacandona. En mayo de 1993, el descubrimiento fortuito del campo atrincherado de Las Calabazas, con instalación eléctrica, cocinas, dormitorios y televisión, no dejaba ninguna duda sobre el nivel que la preparación del levantamiento había alcanzado. Sin embargo, las autoridades fingieron creer que se trataba de un campamento de leñadores clandestinos o de cultivadores ilegales de plantas narcóticas. En diciembre, la expulsión de la población de Las Cañadas que se oponía al EZLN hizo prever el desencadenamiento inminente de las hostilidades. Sin embargo, el presidente destinó a sus cuarteles, para las fiestas de fin de año, a las tropas estacionadas en Chiapas. El temor a que el reconocimiento oficial de una amenaza subversiva pudiera comprometer la ratificación del TLC por el congreso norteamericano sin duda influyó sobre la actitud presidencial, pero no la explica totalmente. Parece más probable que haya preferido dejar madurar el absceso en la esperanza de amputarlo mejor.

Si esta esperanza existió, se desvaneció en los primeros días de enero de 1994. Aplastar la insurrección era ya correr el riesgo de santificar a su jefe por el martirio, pero sobre todo exponer inevitablemente a México y a su gobierno a la condena de la comunidad internacional. Era necesario pues negociar con los insurrectos a partir del momento en que eran rechazados a su santuario lacandón e intentar integrarlos al juego político nacional. El 18 de enero, el secretario del Interior, por otra parte gobernador titular de Chiapas, era destituido. El congreso aprobaba, el 20, una ley de amnistía en favor de los miembros del EZLN que depusieran las armas. Una Comisión para la Paz y la Reconciliación era establecida. Un mes

²⁰ Para hacerse una idea de la literatura de Guillén, véase *La palabra de los armados de verdad y de fuego*, México, Fuenteovejuna, 1994. Los textos oficiales de la insurrección han sido publicados luego en dos volúmenes en las ediciones Era de México. Para saber más, puede entrarse en contacto directo con el EZLN tecleando <http://www.peak.org/justin/ezln/ezln.html>.

más tarde, el 21 de febrero, los representantes del gobierno entablaron negociaciones con Guillén en la catedral de San Cristóbal. El obispo Ruiz, cuyos buenos oficios habían sido aceptados por las dos partes, intervenía como amigable componedor.

Pronto se vio que los neozapatistas no tenían prisa para llegar a un acuerdo. Fuertes con los apoyos que le llegaban de todas partes, apostaban a la crisis del régimen, y los acontecimientos los alentaban a perseverar en este juego. Salinas, en efecto, acababa su mandato en la confusión. El candidato del PRI a su sucesión, Luis Donaldo Colosio, cuya campaña quedaba prácticamente eclipsada en la prensa por el conflicto de Chiapas, no tenía unanimidad en su partido. Uno de sus desafortunados rivales, Manuel Camacho, que Salinas había imprudentemente nombrado jefe de la delegación gubernamental en San Cristóbal y que se beneficiaba por lo tanto de una sobreexposición mediática, dejaba entender que no consideraba su derrota como un hecho. A fines de marzo, el asesinato de Colosio en el curso de un mitin en Tijuana relanzaba la carrera a la candidatura priísta. La investigación, que se perdió sobre pistas que no llevaban a ningún lado, hizo pensar que el asesinato había sido ordenado por una fracción del PRI, quizás asociada con el cártel de la droga. Camacho creyó que su hora había llegado. Fue sin embargo Ernesto Zedillo quien ganó, al término de laboriosas negociaciones internas. Candidato de compromiso, Zedillo estaba desprovisto de experiencia política y no disponía de un equipo personal, lo cual hacía su posición singularmente débil. En septiembre, el secretario general del PRI era a su vez víctima de un atentado tan misterioso, que se atribuyó a un nuevo ajuste de cuentas entre facciones del partido y del cual pronto se vio al inspirador en el propio hermano del presidente. El PRI parecía destruirse a sí mismo. Creado en 1929,²¹ después de una campaña electoral en la cual los candidatos se habían matado mutuamente, perdía su razón de ser si ya no alcanzaba a dar soluciones pacíficas a los diferendos de la "familia revolucionaria".

Al mismo tiempo que alargaban las negociaciones de San Cristóbal, los neozapatistas se las ingeniaban para coordinar bajo el agua la actividad de las organizaciones populares que los apoyaban en el país. Nació así la Convención Nacional Democrática (CND). Ésta respondía a la idea de oponer al régimen, considerado ilegítimo, la "sociedad civil", que la Convención suponía representar. En

²¹ Bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR).

junio, la *CND* montó la operación Caravana de Caravanas que llevó a Chiapas en camiones, desde todo México, doscientas toneladas de víveres y de material a los insurrectos. Por invitación de Guillén, tuvo una asamblea plenaria al comienzo de agosto en el santuario lacandón, en el lugar bautizado Aguascalientes, por el nombre de la ciudad donde se habían reunido en 1914 las fuerzas democráticas y progresistas que la Revolución iba a marginar más tarde. Varios millares de militantes asociativos, de activistas políticos, de sindicalistas y de intelectuales que representaban a 259 organizaciones populares se encontraron en ese lugar, para exigir la dimisión de los poderes públicos, el nombramiento de un gobierno provisorio y la convocatoria de un constituyente. Sin embargo, una vez transcurrida la euforia de la convivialidad festiva, la *CND* ya no dio más que hablar.

Era que, entretanto, las elecciones habían tenido lugar. Habían sido preparadas con la asistencia técnica de las Naciones Unidas y se habían realizado sobre la base de listas electorales enteramente rehechas. Cerca de 78% de los electores inscritos en las listas habían participado. Zedillo había ganado con un poco más de 50% de los sufragios. El candidato del Partido Acción Nacional (*PAN*) había llegado segundo, con 27% de los votos. Según su costumbre, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del *PRD*, que no había obtenido más que 17%, gritó al fraude. Pero ya no era creíble. Las elecciones, en efecto, se habían desarrollado bajo el control de 81 620 observadores mexicanos y de 943 "visitadores" extranjeros enviados especialmente por 283 organizaciones de 40 países diferentes. Sobre todo, sus resultados concordaban tanto con las previsiones de los sondeos preelectorales como con las estimaciones de las encuestas hechas a boca de urna. Sondeos y encuestas, que constituían una innovación en la vida política mexicana, le conferían al escrutinio una fuerte legitimidad. Se había probado que el *PRI* ya no necesitaba recurrir al fraude para seguir siendo la fuerza política dominante del país, de lo cual los analistas imparciales nunca habían dudado.

Los neozapatistas, que no habían logrado derribar al régimen por las armas, tampoco lograban provocar su derrumbe movilizando contra él a la "sociedad civil". Sin embargo, la crisis financiera y económica en la cual ingresó el país a fines de 1994 pareció abrirle nuevas perspectivas. Salinas había hecho de la estabilidad de las tasas de cambio el eje de toda su política antiinflacionaria. En el curso de los últimos años de su mandato, el diferencial de productividad entre la economía mexicana y la norteamericana había llevado a la

sobrevaluación progresiva de la moneda nacional. Resultó un crecimiento de las importaciones y un desequilibrio de la balanza comercial cuyo déficit ascendía a 19 mil millones de dólares en 1993 e iba a alcanzar los 23 mil millones el año siguiente. Este déficit era fácilmente colmado por los capitales extranjeros que fluían para la inversión directa, pero sobre todo para aprovechar tasas de interés elevadas. Desde comienzos de 1994, sin embargo, el alza del precio del dinero en los Estados Unidos hizo el mercado mexicano menos atractivo. Además, la situación chiapaneca ponía en evidencia el riesgo político al que el inversor extranjero se exponía en México. Por fin, la sobrevaluación del peso llegaba a tanto que un reajuste de su paridad aparecía cada vez más como una de las primeras medidas que el nuevo presidente iba a estar obligado a tomar. Esta medida fue tomada, en efecto, el 20 de diciembre, pero de modo tan torpe que precipitó brutalmente el éxodo de capitales y México se encontró sin reservas.

Si era bien diferente por naturaleza de aquella en la que el país estaba sumergido desde 1982, la crisis tuvo las mismas consecuencias económicas y sociales. El 3 de enero un plan de urgencia era negociado con la patronal y los sindicatos, mientras que la comunidad internacional montaba un programa de créditos que totalizaba 40 mil millones de dólares, en garantía de los cuales México debió hipotecar sus reservas petroleras a los Estados Unidos. El plan preveía cortes severos en los gastos públicos para restablecer el equilibrio del presupuesto, y una aceleración de la desregulación y la privatización de la economía. A una política del peso fuerte sucedía una política del peso débil y de mano de obra barata destinada a relanzar las exportaciones. La moneda nacional perdía hasta 60% de su valor. La inflación, cuyo dominio estaría de ahora en adelante asegurado por la gestión de la masa monetaria, desaparecía. Las tasas de interés trepaban hasta 100%, condenando cantidad de pequeñas y medianas empresas a la declaración de quiebra y cerca de 500 000 trabajadores al desempleo. La inflación y la devaluación amputaban el salario real de más de una cuarta parte de su poder de compra. En resumen, la gran mayoría de la población perdía casi todos los beneficios que le había procurado el auge vigoroso de la economía entre 1989 y 1991, para encontrarse más o menos en las mismas condiciones que a mediados de 1980.

Si creemos a las confidencias que dio a la prensa,²² Guillén vio en la crisis el anuncio de una polarización creciente de la sociedad.

²² Véase *La Jornada*, 25 de agosto de 1995.

La pauperización y la desocupación provocarían manifestaciones de descontento cada vez más grandes, a las cuales el poder no podría responder más que con la violencia. La espiral de la agitación popular y de la represión conduciría infaliblemente a una fascistización del régimen. Desembocaría en una situación que favorecería el relanzamiento de la guerra de liberación nacional sobre una base considerablemente ampliada. En abril de 1995, aceptaba reanudar en Larráinzar las negociaciones que no habían terminado en San Cristóbal, mientras que intentaba, pero en vano, resucitar la Convención Nacional Democrática. Finalmente, se unió a la idea de una consulta nacional para la paz y la democracia por la cual el pueblo decidiría soberanamente el destino de su brazo armado.

La consulta tuvo lugar el 27 de agosto de 1995. Había sido preparada, con la ayuda de la Alianza Cívica, por diversas organizaciones miembros del CND. Cerca de 1.9 millones de personas se presentaron en las 11 900 casillas de voto que habían sido instaladas en todo el país. La participación fue particularmente importante en los estados de Chiapas, Tabasco, México, Oaxaca y Veracruz, así como el Distrito Federal, donde 285 000 sufragios fueron emitidos, es decir casi igual que en el referéndum por el cual la población de la capital había elegido su estatuto administrativo dos años antes. Con excepción de una ínfima minoría, todos los votantes se pronunciaron en favor de la integración de los neozapatistas al sistema político: 52% de ellos deseaban tomar una iniciativa conducente a la creación de un nuevo partido que reuniría a la extrema izquierda; los otros emitían el deseo de que se unieran a los rangos del PRD.

¿Guillén se encontró decepcionado? Desde el punto de vista técnico, la consulta fue un notable éxito. Por otra parte, la participación que había suscitado mostraba que la corriente de simpatía hacia el neozapatismo, lejos de agotarse, se mantenía desde el mes de febrero, cuando 100 000 personas habían salido a las calles de México para impedir que el ejército federal cerrara su cerco alrededor del santuario lacandón. Pero los resultados revelaban sin embargo que la crisis económica no había radicalizado la opinión, que los neozapatistas no tenían una audiencia nacional y que no constituían, en realidad, más que una minoría en el seno de la minoría.

Si bien se realizaron intentos para explorar las vías que las consultas sugerían emprender, el PRD no hizo nada para que se llevaran a cabo. Después de haber oficialmente aprobado los objetivos democráticos que la insurrección fijaba, pronto había tomado distancia de los insurrectos, que manifestaban por otra parte abundante

desconfianza hacia ellos. No podían contemplar sin temor la aparición a su izquierda de una formación que forzosamente les quitaría electores y a la cual una parte de sus militantes estarían sin duda tentados de pasar, especialmente quienes venían de organizaciones populares y que coexistían penosamente con los tránsfugas del PRU y los antiguos comunistas. Más difícil todavía les era aceptar la idea que el neozapatismo pudiera convertirse en uno de sus elementos constitutivos. Aureolado de su prestigio, Guillén no podría entonces sino comprometer el frágil equilibrio que Cuauhtémoc Cárdenas mantenía sutilmente alrededor de su persona y sobre el cual reposaba, en definitiva, la unidad del partido. De cualquier manera que operara, el PRD saldría perdiendo por la entrada del neozapatismo en el sistema político.

Al comienzo de 1996 el interés que la opinión mexicana y extranjera mostraba hacia la insurrección comenzó finalmente a dar señales de cansancio. Los reflectores de la actualidad ya no estaban apuntados hacia los hechos y gestos de los insurrectos. En el santuario lacandón, las filas de estos últimos se clareaban como consecuencia de desertiones que se hacían más numerosas. Guillén intentó una salida a la situación en que se encontraba encerrado, organizando una conferencia intercontinental contra el neoliberalismo. La conferencia se abrió el 27 de julio. Antiguos combatientes de las guerrillas latinoamericanas fueron a desgranar sus gloriosos recuerdos de los años sesenta y setenta. Respetables profesores europeos llegaron a revalidar su estatuto intelectual. Una viuda de jefe de Estado propuso incluso sus obras pías. No fue suficiente para hacer de la conferencia un éxito. El gran bostezo anónimo y universal del que habla Octavio Paz estaba por poner fin al espectáculo que el neozapatismo había dado con talento y que había mantenido al mundo con el aliento suspendido por largos meses.

Si el poder no había podido neutralizar el conflicto chiapaneco antes que estallara, por lo menos lo había gestionado con notable ingenio. El régimen levantó la amenaza que la insurrección hacía pesar acelerando el proceso de democratización en el cual se había comprometido desde los años setenta. En enero de 1994, los partidos firmaban el Pacto de Civilidad para crear un clima de confianza al interior de todas las instancias que debían intervenir en las siguientes elecciones. En marzo, el congreso reunido en sesión extraordinaria adoptaba una ley que modificaba la organización del Instituto Nacional Electoral (IFE). En adelante, el consejo general del IFE estaría compuesto ya no más de representantes

de las formaciones políticas, sino de ciudadanos. Se creaba un tribunal para sancionar el fraude electoral, que se convertía en delito. Las listas de electores eran sometidas a una auditoría externa. La presencia de observadores nacionales en los escrutinios y la de "visitadores" extranjeros quedaba oficialmente permitida. Semejantes disposiciones sin duda habrían sido antes o después tomadas, pero hay que reconocer a los insurrectos el mérito de haber hecho sentir su urgencia y de haber de esta manera contribuido a la indiscutible transparencia de las elecciones de julio de 1994, que relegitaron el régimen. No es la menor paradoja de la insurrección neozapatista que, suscitando una reacción de tipo democrático, se haya minado a sí misma el terreno.

* * *

La insurrección chiapaneca es reveladora de tres órdenes de hechos. Para empezar, la base sobre la que reposa manifiesta la existencia de una población supernumeraria surgida de la descomposición del campesinado tradicional y que ya no encuentra su lugar en la estructura moderna de clases. En constante expansión en Chiapas, como en el resto de México y en toda América Latina, esta población que ya no es ni siquiera explotable vive en la precariedad económica y la inseguridad psicológica. La importancia numérica que ha adquirido hoy, y que la puesta en marcha de recetas neoliberales, que intensifican el factor capital a expensas del factor trabajo, no contribuirá a reducir en un futuro próximo, modifica radicalmente el corte de la sociedad, al interior de la cual tienden ya a oponerse un sector estratificado, organizado e integrado al proceso de producción, y un sector masificado, inorgánico, mantenido al margen de las actividades productivas.²³ Este último sector, particularmente fluido, ofrece poca presa al Estado y escapa en gran parte al control de sus aparatos. Aunque naturalmente amorfo, aspira a

²³ Hemos propuesto este corte del campo social latinoamericano especialmente en "L'Épuisement du modèle national de développement en Amérique Latine", *Universalía* 1989, París, Encyclopaedia Universalis, 1989, pp. 132-140. Véase también Sergio Zermeno, "Los hijos del libre comercio", *Pretextos*, núm. 7 (1996), pp. 83-119, que corta la sociedad mexicana en un sector moderno, un sector tradicional y un sector intermedio que correspondería a nuestro sector masificado. Pero si se define al sector tradicional por la economía de subsistencia, hay entonces que reconocer que no existe más que en calidad de vestigio tanto en México como en el resto de América Latina.

la organización y se presta a las tentativas de movilización por la base. El tema sobre el cual esta movilización se efectúa, que puede ser de carácter revolucionario, reformista, conservador o escapista, y de naturaleza religiosa o política, importa en definitiva muy poco. Lo importante es que el movimiento sea generador de un lazo social y que, proponiendo un sistema de referencias y un encuadramiento, devuelva un sentido a vidas inútiles. Su éxito es muy a menudo proporcional a la rigidez de las estructuras en las que cuele una población que deriva en la anomia, y en rigor de la disciplina que le impone.

Luego, el contexto en el cual la insurrección madura y los orígenes que encuentra ponen en evidencia la inserción precoz de Chiapas en un mundo "globalizado". Coto de los antropólogos de Chicago, luego paraíso de los *hippies* californianos, este estado que se pretende aislado ve afluir misioneros protestantes que provienen de los Estados Unidos y de América Central, jesuitas belgas, dominicos norteamericanos, curas franceses y quebequenses, monjas canadienses y españolas, así como cantidad de concientizadores, promotores y desarrolladores de diversas nacionalidades a partir de los años sesenta. Estos recién llegados se asocian con mexicanos originarios de otras regiones del país y colaboran con instituciones públicas, eclesiásticas o privadas locales, sin que ninguna renuncie sin embargo a su propio proyecto. Ellos hacen de Chiapas un cruceiro de influencias cosmopolitas al mismo tiempo que lugar de intersección de redes transnacionales, que animan o en las cuales participan. Estas redes, más o menos densas pero siempre muy extendidas, transmiten noticias del estado a Norteamérica o Europa, y transfieren a cambio fondos recolectados en Ottawa, en Amsterdam o en Estocolmo, hacen viajar expertos entre países y continentes. La interpenetración de lo local, lo nacional y lo internacional, que caracteriza la globalización, se observa en el trabajo de movilización del que otras poblaciones que pertenecen al sector masificado son hoy día objeto en México y América Latina. El fenómeno de la globalización desborda el cuadro puramente económico para alcanzar tanto las clases dominantes como las periferias sociales más excéntricas.²⁴

Por fin, la extraordinaria repercusión que conoce hace aparecer esta insurrección como una guerra de imágenes librada con *fax*,

²⁴ Villa El Salvador, en Perú, presenta el caso típico de una ciudad perdida globalizada.

video y computadora. Por primera vez, Internet ha sido utilizado como arma ofensiva en el conflicto de baja intensidad. Desde los primeros días del conflicto, los neozapatistas han llegado a imponer a la opinión nacional e internacional una imagen fuertemente valorizada de sí mismos y una imagen del mismo modo desvalorizada de su adversario, difundiendo a un tiempo una sabia mezcla de informaciones verdaderas y falsas pero congruentes, bajo las cuales se escondían sus verdaderos objetivos de guerra. Esta empresa de desinformación estuvo a punto de desestabilizar al régimen mexicano al punto que la hipótesis de un colapso pudo por un momento ser prevista. El caso chiapaneco que posee, en este sentido, un valor ejemplar, y que sin duda hará escuela, presenta a todos los intentos de subversión que el neoliberalismo no dejará de suscitar indirectamente en América Latina una nueva forma de lucha para la cual los Estados latinoamericanos, en un reacomodo más o menos caótico, no parecen estar preparados.

Traducción del francés de Hernán G. H. Taboada